



**Hble. Sra. D<sup>a</sup>. Catalina Cladera Crespi**

Consejera de Hacienda y Administraciones Públicas

Gobierno de Illes Balears

Madrid, a 4 de agosto de 2016

Estimada Consejera,

El pasado 6 de abril se remitió comunicación por parte del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, según la cual, se activaban para la comunidad las medidas coercitivas previstas en el artículo 25.1.a) de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, relativas a la aprobación de la no disponibilidad de créditos y a la retención de los mismos que garantizara el cumplimiento del objetivo establecido.

En el Plan de ajuste que se acordó con la comunidad para la adhesión al Fondo de Liquidez Autonómico del ejercicio 2016 se concretó que resultaba innecesario la adopción de dichos acuerdos de no disponibilidad, a la vista del conjunto de medidas y escenarios relativos a la evolución financiera del ejercicio 2016, que recogían un cierre previsto del -0,5% del PIB regional, compatible, por tanto, con el objetivo de estabilidad del -0,7% incorporado en el Programa de Estabilidad comunicado a las instituciones europeas.

En relación a dicho plan de ajuste acordado, resulta imprescindible llevar a cabo un adecuado seguimiento de su cumplimiento, así como velar porque se mantienen las circunstancias en relación a la ausencia de necesidad de adoptar acuerdos de no disponibilidad en cumplimiento del citado artículo 25 de la LOEPSF. En este sentido, en la reunión mantenida esta misma semana, se ha tenido ocasión de poder valorar conjuntamente con tu comunidad algunos aspectos que pueden influir en la consecución de los escenarios previstos en el plan de ajuste, como es el caso de la viabilidad de la tramitación presupuestaria en 2016 de la financiación de actuaciones en materia de carreteras.



Atendiendo al momento del ejercicio presupuestario en el que nos encontramos resulta de especial trascendencia contar con toda la información necesaria para evaluar y detectar posibles riesgos que puedan amenazar el cumplimiento del objetivo de estabilidad, el objetivo de deuda o la regla de gasto, con el fin de activar, en su caso, las actuaciones necesarias para procurar el adecuado cumplimiento de la senda de consolidación fiscal y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Comisión Europea con los que todas las Administraciones Públicas estamos comprometidas. A modo de ejemplo, el Estado, adicionalmente a la instrumentación de un Acuerdo de no disponibilidad de 2.000 millones de euros, ha procedido a adelantar al mes de julio el cierre del presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias.

En todo caso, esperamos poder volver a evaluar el conjunto de circunstancias que pueden afectar al cumplimiento de los escenarios y objetivos a lo largo del mes de septiembre, una vez que hayamos podido analizar, entre otros aspectos, los datos de ejecución presupuestaria remitidos por la comunidad relativos al mes de junio y la información adicional que os solicitamos. De esta manera, sin perjuicio de las aclaraciones que se puedan solicitar desde las unidades competentes del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, os agradeceríamos el envío de determinada información antes del próximo 5 de septiembre, en relación a las siguientes cuestiones:

- Líneas fundamentales de la orden de cierre del ejercicio 2016 prevista por la comunidad, con referencia a la fecha prevista de publicación y a los plazos límite en la asunción de compromisos de gasto adicionales, remitiendo información sobre los efectos estimados de dicha orden y la evaluación mensual de dichos efectos desde su adopción, conforme al modelo A24 disponible en el envío de los cuestionarios de la plataforma CIMCA.
- En la medida en que el artículo 25 de la LOEPSF anteriormente citado establece limitaciones al incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto dicha información será objeto de un seguimiento específico, te agradecería la remisión de los informes a los que se refiere el artículo 10 y 12 de la ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica, así como la información adicional que con posterioridad y a estos efectos se pueda solicitar específicamente por parte del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Por último, quiero trasladarte la importancia en la adopción de las decisiones necesarias que permitan el cumplimiento de los compromisos asumidos a este respecto, así como las implicaciones que su incumplimiento determina para cada una de las Administraciones Públicas, en virtud del principio de responsabilidad regulado en el



artículo 8 de la LOEPSF, conforme al cual cada Administración Pública asumirá, en la parte que le sea imputable, las responsabilidades derivadas del incumplimiento de los compromisos asumidos por España de acuerdo con la normativa europea o las disposiciones contenidas en tratados o convenios internacionales, y que ha sido objeto de desarrollo conforme a lo previsto en el Real Decreto 515/2013 por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la UE.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la información indicada, con el convencimiento de que la comunidad está llevando a cabo los esfuerzos necesarios para el cumplimiento de los objetivos establecidos para el ejercicio corriente.

Atentamente,

Antonio Beteta Barreda